



RECONSIDERACIÓN DE LA UNIVERSIDAD

TRIBUNA POLÍTICA

ANTONIO PAPELL
PERIODISTA



A veces cobra todo el sentido la afirmación de que las crisis, por dramáticas que sean, son oportunidades para revisar inercias y realizar cambios que de otro modo hubieran sido más difíciles de plantear. Y es patente que, con independencia de la posición que se adopte con relación a las políticas de austeridad que nos impone la pertenencia a Europa, aparecen diversos ámbitos en que la racionalización es pertinente. Uno de ellos es el de la Universidad española, a la que se refirió la pasada semana el ministro del ramo, **José Ignacio Wert**, considerado uno de los miembros más progresistas del Gobierno **Rajoy** a pesar de ciertas intervenciones polémicas tras su designación.

Wert anunció la constitución de una comisión de expertos para proponer una reforma del sistema universitario que racionalice el conjunto, claramente excesivo y desordenado. En concreto, el Ministerio, en la documentación que acompaña el Presupuesto del Departamento, argumenta un exceso de oferta universitaria una clara falta de eficiencia por la “desproporción entre resultados e inversión”. El croquis que ha realizado el Ministerio es desolador: “solamente un tercio de los estudiantes terminan un título sin repetir ningún curso”, media que en la

OCDE está en el 40%, y la tasa de abandono en la universidad es del 30%, el doble que en Europa. Asimismo, la calidad del modelo es dudosa ya que “no hay ninguna universidad española entre las 150 mejores del mundo”; además, el sistema está “muy poco internacionalizado”, con menos de un 5% de alumnos extranjeros, y tiene una proporción “muy elevada” de profesorado que no tiene



un sexenio vivo, “es decir, que no está investigando ni generando conocimientos”.

Wert ha incidido también en que, acabados los estudios, los resultados tampoco son satisfactorios, como lo demostraría el hecho de que “entre los parados en el tramo de edad de 25 a 29 años, el 21% son universitarios”. “Si ampliamos la observación para

hablar de subempleados, tendríamos un panorama más complicado”, ha asegurado.

Pues bien: esta situación describe una maraña universitaria de 79 universidades públicas y privadas repartidas en 236 campus, que imparten 2.413 grados, 2.758 masters y 1.680 doctorados. Con toda evidencia, la descentralización autonómica ha tenido el efecto de disgregar la institución universitaria, puesto que cada comunidad autónoma ha querido crear sus propios centros de educación superior, pensando que para edificar una universidad era sólo necesario construir un edificio y contratar una plantilla de profesores. Se ha ignorado que una universidad es sobre todo un centro de investigación que ha de asociarse al tejido económico y empresarial, a los hospitales universitarios y al resto de la estructura cultural de la comunidad donde se implante.

En definitiva, parece indispensable la apuesta por la concentración y por la especialización, basadas en una correcta asignación de los recursos disponibles y por la coordinación entre las instituciones públicas y privadas. También en este asunto, vital para la modernización del país y para el necesario cambio del patrón de crecimiento, se ha actuado con ligereza y frivolidad, derrochando los recursos públicos; entre otras causas, porque el Estado ha hecho dejación de la tarea de planificación, supervisión y control que le corresponde constitucionalmente, como en cualquier estado federal digno de tal nombre. ■